

mente de los dos que se expresan á continuación:

Que de estos, el primero consiste en no aparecer en ningun libro ni documento de la oficina en que servía Zubirán como Administrador, que se diera entrada á los cuatrocientos dos pesos veintisiete centavos, pagados á nombre de Hickman segun el recibo que obra en la causa, (fójas 75 C. P.) sin que pueda admitirse como legalmente comprobada la explicacion dada sobre este punto por Zubirán en su confesion con cargos, (fójas 214 y siguientes C. P.)

Que el segundo de los mencionados, estriba en el rebajo de las dos terceras partes de los derechos de Arancel, rebajo hecho indebidamente, puesto que la autorizacion del Ministerio de Hacienda de 21 de Mayo de 1866, ni era aplicable á la Aduana del Presidio del Norte cuando se habia dado para la del Paso, ni debia subsistir despues de restablecido el Orden constitucional, ni permitir la alteracion de las facturas de los comerciantes, quedando por lo mismo reducida en esta parte la defensa del acusado á su asercion de que obraba por Orden del Gobierno del Estado, al que se habian otorgado amplias facultades en el ramo de Hacienda, prorogadas hasta fines de Mayo de 1868, segun lo acredita un certificado de dicho Gobierno, (fójas 114 C. P.)

Que si bien en los procedimientos del Sr. Zubirán, como Administrador de la Aduana del Presidio, se notan errores é irregularidades, no se encuentra en ellas dolo ó mala fé, ni hay pruebas de que cometiera delito alguno.

Por estas consideraciones y fundamentos, es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Durango en 6 de Julio del corriente año, y se declara:

Primero: Que no fué un simple expediente informativo, sino una causa formal, la que mandó instruir el Supremo Gobierno contra el C. Juan N. Zubirán, aplicándole la parte final del artículo 26 de la ley de 17

de Febrero de 1837; y que en consecuencia la autoridad Judicial ha procedido en este negocio dentro de la órbita de sus atribuciones.

Segundo: Que es de la propiedad de la Hacienda pública la cantidad de cuatrocientos dos pesos veintisiete centavos, depositados en la Aduana del Presidio del Norte, en reposicion de igual suma cobrada al Señor Don Santiago P. Hickman.

Tercero: Que se absuelve al C. Juan Nepomuceno Zubirán de los cargos formulados en su contra, sin que la formacion de la presente causa perjudique su buena opinion y fama.

Devuélvanse las actuaciones de 1ª y 2ª instancia al Tribunal de Circuito de Durango, con cópia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes.

Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan José de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Mariano Zavala.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias. México Enero 26 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el C. Celso Ortíz, apoderado de la Sociedad agrícola de San Andrés Tuxtla, contra el decreto número 105 de la H. Legislatura de aquel Estado.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Celso Ortíz, apoderado de la Sociedad agrícola de

San Andrés Tuxtla, solicita amparo y protección de la Justicia Federal, contra el decreto número 105 de la H. Legislatura, de 8 de Julio de 1878, que declaró que los terrenos pertenecientes al Municipio de San Andrés Tuxtla, estan comprendidos en el artículo 29 de la ley número 39 de 22 de Diciembre de 1826, que mandó hacer el reparto de los terrenos de comunidades de indígenas, y contra la Orden librada por el Superior Gobierno del Estado, relativa á la ejecución de dicho decreto, por que en ella se dispone que los expresados terrenos de la propiedad de la referida Sociedad, que no son de los llamados de comunidad de indígenas, se repartan entre ellos con arreglo á las citadas disposiciones, violándose con ellas la garantía que concede á sus poderdantes el artículo 27 de la Constitución federal; pidiendo á la vez que se suspendiera el acto reclamado, por la urgencia y circunstancias del caso, á cuya pretension se sirvió acceder el Juzgado, mientras se determinaba en definitiva sobre lo principal y se pidió respecto de este el informe correspondiente al H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, á quien estaba cometida la ejecución del decreto número 105 ya citado.

La indicada Corporación ha informado de absoluta conformidad con los hechos que se relacionan en el ocuso, disposiciones que se citan y documentos que se acompañan, por lo que no es necesario recibir á prueba el juicio.

Y apareciendo de sus constancias que los promoventes son dueños de quince sitios de tierra existentes en la indicada Villa de San Andrés Tuxtla y sus cercanías, comprados en 12 de Junio de 1839 á Don Luis Ruiz, por cierto número de habitantes para su beneficio particular y con el objeto de favorecer á los demás vecinos que no sean dueños, mediante la pensión ó cánón que debía asignárseles, en el precio de \$5200 que fueron satisfechos, cuya venta se otorgó en debida forma y previo pago de la alcabala, según el testimonio de la escritura de 12 de

Junio de 1839; que como tales propietarios han estado administrando esos terrenos y pagado las contribuciones correspondientes sin que el honorable Ayuntamiento hubiese intervenido, bajo de ningún concepto, en su administración y arrendamiento de las porciones que se concedían á los que no eran condueños, y que han estado en pacífica posesion de los mismos terrenos desde que los compraron, no habiéndoles movido pleito ante los Tribunales ninguna autoridad, corporación, ni particulares que se las interumpiera; que nombraron una Junta directiva para la Administración de los propios terrenos y formaron su reglamento que normara sus procedimientos, y que el comun de indígenas jamás ha pretendido tener derecho á ellos como únicos dueños ó poseedores por algun título; que el Supremo Gobierno por su resolución dictada en 7 de Diciembre de 1860 declaró, que no eran denunciabiles ni menos redimibles y que sus dueños solo podían disponer de ellos: que el H. Ayuntamiento y la Legislatura política de San Andrés Tuxtla aseguran, que los mencionados terrenos no pertenecen á ninguna comunidad de indígenas, y que en el Canton no existen terrenos de esta clase, y en atención por otra parte; á que estando los quejosos en legítima posesion de sus terrenos, no pueden ser molestados en ella, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y á que la propiedad que tienen adquirida no pueda ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización, como lo previenen los artículos 16 y 27 de la Constitución federal; resulta, que las disposiciones que ordenan el reparto de los repetidos terrenos, violan las garantías individuales de que deben disfrutar los quejosos amparados por los citados artículos, siendo así que han justificado que no los posee el Municipio, sino una sociedad compuesta de particulares, que por los artículos 49 y 99 tienen derecho de asociarse y dedicarse al trabajo que les acom-

de siendo útil y honesto y aprovecharse de sus productos libremente, y que tampoco correspondea á ninguna comunidad de indígenas.

Por enuyos fundamentos legales, el suscrito Promotor pide á usted que se sirva amparar y proteger á nombre de la Justicia de la Union á los CC. José M.<sup>a</sup> Figueroa y demas componentes de la Sociedad agrícola de San Andrés Tuxtla, como dueños y poseedores de los terrenos comprados al C. Luis Ruiz, contra el decreto número 105, de 3 de Julio de 1873 expedido por la H. Legislatura, y órdenes libradas por el Superior Gobierno del Estado; para que se repartan entre los indígenas de aquella poblacion.

H. Veracruz, Octubre 12 de 1874.—*Lic. José M. López de Escalera.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Heróica Veracruz, Octubre 17 de 1874.—Visto el juicio de amparo y proteccion promovido por el C. Celso Ortiz, apoderado especial de la Sociedad agrícola propietaria de los terrenos ubicados en la Villa de San Andrés Tuxtla, contra el decreto núm. 105 de la H. Legislatura del Estado, de 3 de Julio de 1873, en que se declaró que los terrenos pertenecientes á la indicada Villa se hallan comprendidos en el artículo 2º de la ley número 39 de 22 de Diciembre de 1826, que mandó hacer el reparto de los terrenos de comunidades de indígenas, y contra la órden librada por el Gobierno del Estado para la ejecucion de las espresadas disposiciones, respecto de los terrenos referidos, con violacion de las garantías que otorga al hombre el artículo 27 de la Constitucion federal, solicitándose al mismo tiempo que se suspendiera el acto reclamado, por las razones emitidas en el auto de 30 de Setiembre próximo pasado en que se mandó suspender dicho acto, en razon de ser notoria la urgencia del caso, segun se manifiesta en los documentos que se acompañan al ocursu,

TOMO VII.—PARTE II.

hasta que se resuelva en definitiva sobre la solicitud principal del amparo, habiéndose producido el informe correspondiente, con la debida justificacion por el H. Ayuntamiento, sobre lo espuesto en el ocursu referido, siguiendo el pedimento del C. Promotor fiscal, teniéndose presente las demas constancias de los autos y alegatos de los ocurretos en apoyo de su derecho; y

Considerando: que segun la escritura de compra venta que consta desde la f6ja 6 á 10, otorgada en 12 de Junio de 1839 por el Coronel Don Luis Ruiz en favor de los vecinos é indígenas de la Villa de Tuxtla, representados por los CC. Lic. Manuel Antonio de la Cabada, Manuel Cinta, José A. García y Leon Minguis, consta que el primero vendió á estos últimos, quince sitios de tierra bajo los linderos que demarca, en la cantidad de \$ 5,200 que fueron pagados por dichos compradores.

Que segun el informe de f6jas 17 vuelta, emitido por el H. Ayuntamiento al Superior Gobierno del Estado, con relacion á los terrenos que se cuestionan, acredita que no son de comunidad de indígenas, pues fueron comprados por una parte de la poblacion, compuesta de individuos de varias especies, naturales de la localidad y algunos extrangeros.

Que los llamados indios no son colonos ni arrendatarios, sino condueños para el aprovechamiento y uso de los terrenos, como cualquiera de los demas compradores que contribuyeron para la compra de los referidos terrenos.

Que el H. Ayuntamiento no administra mas bienes que los que corresponden al fundo legal de la poblacion.

Que con anuencia de los propietarios ha sido marcado el ejido, y esta demarcacion está competentemente aprobada por el Superior Gobierno del Estado, como se justifica por el artículo 16 reformado del reglamento de policía local de la predicha Villa, no existiendo litigio alguno sobre los espresados terrenos.

Que los dueños de esos terrenos han sido considerados como tales y legítimos poseedores por las autoridades del Estado y del Canton respectivo, antes de que se expediera el decreto número 105 que motiva la queja, según se advierte de los documentos y demás datos acumulados á este expediente.

Que la Sociedad nombrada para administrar los bienes relacionados, acordó un reglamento para que sirviera de base á las operaciones, sin que á ello se opusiera ni la H. Corporación, ni la Gefatura política, ni los indígenas que pertenecen al Municipio.

Que algunos individuos indígenas que no pagaron la cuota que les correspondía, para la compra de los terrenos en cuestión, fueron excluidos de la Sociedad por no tener derecho alguno como propietarios, y sin embargo, se les permitía hacer sus siembras sin pago de arrendamiento, según se ve en la información de fôjas 56.

Que por el informe del H. Ayuntamiento de Tuxtla, se demuestra que no administra los referidos bienes, y que la Sociedad agrícola es la que como propietaria, tiene competente administración y cumple con el pago de contribuciones.

Que los bienes relacionados no pertenecen á comunidades de indígenas, por que no existe ninguna en los pueblos del Municipio, lo cual es concordante con lo espuesto por los quejosos, sin que se note contradicción que desvirtuó lo alegado por los dichos quejosos.

Que la Gefatura política del Canton, certifica al calce de la acta levantada por los poderdantes del C. Celso Ortiz, que son dueños de los terrenos pertenecientes á la Sociedad agrícola, y que por este motivo dichos terrenos se hayan proindivisos, y no por pertenecer á comunidades de indígenas.

Que los quejosos han probado suficientemente, que son propietarios de los terrenos ubicados en el Municipio de San Andrés Tuxtla, y que fueron comprados al Coronel D. Luis Ruiz en 12 de Junio de 1839, y que han estado en ellos quieta y pacíficamente

por 35 años que han transcurrido, sin que ninguna corporación ni persona les haya promovido pleito de propiedad ó posesión en el transcurso de tan largo período.

Que con arreglo á lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución federal, los quejosos no pueden ser molestados en la posesión, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, y no habiéndose cumplido con estas condiciones, no hay fundamento para que se despoje á la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla, de los terrenos que le pertenecen legítimamente, para repartirlos entre todos los indígenas de la misma localidad, que ningún derecho tienen á ellos, por no haber contribuido.

Que conforme al artículo 27 de la Constitución federal, la propiedad de las personas no puede ser ocupada sino por causa de utilidad pública, y previa indemnización, lo cual no se tuvo presente al expedirse dicho decreto, por lo que se han violado las garantías contenidas en aquella disposición constitucional.

Por estos fundamentos, y atendiendo á que las disposiciones que ordenan el reparto de los terrenos de los quejosos y que se hallan en el Municipio repetido de Tuxtla, violan indudablemente las garantías individuales consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitución federal; el Juzgado con presencia de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, falla definitivamente:

1º: La Justicia de la Nación ampara y protege á los CC. José M.<sup>a</sup> Figueroa y demás miembros de la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla, como dueños y poseedores de los terrenos comprados á D. Luis Ruiz, contra el decreto número 105 de 3 de Julio de 1873 expedido por la H. Legislatura del Estado, y órdenes libradas por el Superior Gobierno del mismo, para que se repartan entre los indígenas de aquella población.

2º: Notifíquese á los interesados, sáquen-

se las copias prevenidas para su publicacion en el *Progreso y Semanario Judicial de la Federacion*, y elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo pronunció y firma el C. Juez 2º suplente de Distrito. Dámos fé.—*Lic. José M. de Manero y Embides.*—De Asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia que certifico. H. Veracruz, Octubre 19 de 1874.—*José M. de Manero y Embides.*—De Asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 21 de 1874.—Dada cuenta á esta Suprema Corte de Justicia, con el expediente instruido en el Juzgado de Distrito de Veracruz, con motivo del juicio de amparo promovido en dicho Juzgado por el C. Celso Ortiz, apoderado de la Sociedad agrícola de la Villa de San Andrés Tuxtla, contra el decreto de la Legislatura de aquel Estado, núm. 105, expedido en 3 de Julio de 1873, en que se declara que los terrenos pertenecientes al municipio de la expresada Villa, están comprendidos en el art. 2º; y tambien contra las Órdenes que el Gobierno de aquel Estado ha librado, para que en virtud de lo ordenado en dicha disposicion legislativa, fueren repartidos los terrenos de los quejosos, alegando estos que con tales actos se han violado en sus personas las garantías que les otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitucion de la República, puesto que por autoridad incompetente, sin formalidad alguna y sin previa indemnizacion, se dispone de su propiedad, despojándolos por acto legislativo y otro de pura administracion, de terrenos que ha mas de treinta y cinco años compraron, y en todo ese tiempo han poseido sin reclamo ni oposicion de ninguna clase.

Visto el escrito en que dicho C. Ortiz funda su peticion de amparo, así como los

documentos en que la apoya y de los que efectivamente aparece, que hace 35 años la Sociedad que representa, se halla en pacífica y quieta posesion de los terrenos de que se trata, que jamas los ha administrado el Ayuntamiento de aquella Villa, ni los ha considerado como pertenecientes á la comunidad de San Andrés Tuxtla, habiéndose declarado no redimibles ni adjudicables, y que únicamente sus dueños pueden disponer de ellos por Suprema resolucion de 7 de Diciembre de 1860.

Visto el informe de la autoridad inmediatamente ejecutora del acto reclamado, la que en vez de justificar éste, contestó enteramente de acuerdo con lo que exponen los quejosos en su solicitud de amparo, reconociéndolos como únicos propietarios de los terrenos que reclaman, y asegurando que nunca han juzgado á estos como del Municipio que representa, segun aparece de todas las constancias que sobre este particular existen en la Secretaría de aquel Ayuntamiento.

Visto el parecer del C. Promotor fiscal que estimó no debía recibirse el negocio á prueba, ni alegarse de bien probado, por hallarse todos conformes en los hechos que se investigaban, pidiendo en consecuencia, que el Juzgado ampare á los peticionarios en los mismos términos que lo solicitaban.

Vista la sentencia que pronunció el Juzgado de Distrito de Veracruz, de conformidad con lo pedido por su Promotor, amparando á los individuos que forman la Sociedad agrícola de San Andrés Tuxtla, tanto contra la ley que la H. Legislatura de Veracruz espidió en 3 de Julio del año de 1873 declarando que los terrenos pertenecientes al Municipio de dicha Villa, estan comprendidos en la ley número 39 de 22 de Diciembre de 1826: y que por estarlo, se proceda respecto á ellos segun en ella se dispone, como contra las Órdenes del Gobierno de aquel Estado, en que manda se repartan los terrenos de la Sociedad de que se trata, entre los indígenas de aquella poblacion; y

Considerando: que la ley en contra de la

que se ha pedido amparo, únicamente en términos generales declara comprendidos en la de 22 de Diciembre de 1826 los terrenos pertenecientes á la Municipalidad de San Andrés Tuxtla, y que estos y no los que posee y administra la Sociedad agrícola, sean repartibles; esa disposición general buena ó mala, en nada afecta los intereses de la expresada Sociedad, ni ataca sus derechos, no pudiendo por lo mismo sostenerse que viola garantía alguna á los individuos que la componen, puesto que se refiere á otros terrenos y no á los que ellos poseen y disfrutan.

Considerando por otra parte que no puede decirse lo mismo de las Órdenes gubernativas que mandan repartir los terrenos expresados, privando á sus poseedores del uso y aprovechamiento de ellos, sin habérseles oído y en derecho vencido; que sea cual fuere el motivo por el que haya podido disputárseles la propiedad que alegan tener en ellos, reconocido el hecho innegable de que ha tantos años los poseen sin contradicción, no son los poderes Legislativo y Ejecutivo los designados por la Constitución general para decidir esa cuestión, exclusivamente encomendada por la Suprema Ley de la Nación al Poder Judicial: que por lo mismo, los Tribunales de Justicia y no otra autoridad, son los únicos competentes para fallar sobre esta propiedad disputada y en el juicio respectivo con las solemnidades y fórmulas del derecho; que por esto el Gobierno de Veracruz al disponer se ocupen y repartan los terrenos de que se trata, no teniendo competencia para hacer tal declaración, ha violado en las personas de los quejosos, las garantías que les otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitución federal, y en este punto es de confirmarse la sentencia que los ampara.

Por los fundamentos espuestos, y con apoyo á la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Primero. Se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito de Veracruz en la parte que ampara á los CC. José M<sup>a</sup> Figueroa y demás miembros de la Sociedad agrícola de

San Andrés Tuxtla, contra las Órdenes del Gobierno de aquel Estado, que manda repartir los terrenos que posee y administra dicha Sociedad.

Segundo. No se confirma en la parte que los ampara contra el decreto número 105 de la H. Legislatura, por no referirse éste á dichos terrenos.

Tercero. Reformada en estos términos la referida sentencia, vuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, para el cumplimiento de este fallo y demás efectos legales.

Así por unanimidad de votos lo decretaron y firmaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José S. Arteaga.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—*I. M. Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*José G. Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Diciembre 18 de 1874.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por los Sres. J. Kelly y compañía, J. de la Vega y compañía, y Francisca N. Hidalgo, contra el ciudadano administrador de rentas de Mazatlán, que rehúsa recibirles una cantidad de cobre por contribuciones.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice:

Que en otros juicios de amparo que se encuentran, ó bien resueltos por ese Juzgado, ó bien pendientes de resolución, juicios entablados con motivo de fundamentos iguales al presente, el fiscal ha pedido que